

## *Absurda politización de la crisis del sistema nacional de salud*

El sistema nacional de salud ha sido paralizado por una huelga que comenzó con una suspensión de labores en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y, transcurrido más de un mes desde que se inició, ha terminado por incluir a prácticamente todo el gremio médico, integrado en un frente único, cuya principal bandera de lucha es el rechazo a los planes de privatización de la seguridad social, promovidos por el gobierno de Flores. En el tiempo transcurrido desde que comenzó la huelga —durante la segunda mitad del mes de septiembre— hasta la última semana de octubre, los ánimos se caldearon hasta niveles indecibles, la intransigencia gubernamental fue la norma y lo que en un primer momento fue un conflicto bien localizado, se convirtió en un conflicto de alcance nacional, en tanto que la huelga no solo se extendió al sistema nacional de salud, sino que se prolongó más de lo que razonablemente se pudo haber esperado.

Curiosamente, la huelga promovida por el gremio médico y los sindicalistas del seguro social (SIMETRISSS y STISSS) tiene como objetivo —según sus promotores— impedir un proceso de privatización que marginaría a los salvadoreños más pobres de los servicios de salud. Es decir, con la huelga —un “mal menor”— se pretende evitar un “mal mayor”: la privatización de los servicios de salud. Por su lado, los voceros del gobierno de Flores insisten en los vicios del sistema de salud pública —burocracia, lentitud en la atención, carestía de medicamentos—, los cuales perjudican

—en la óptica de los voceros del gobierno— a los usuarios. El remedio para estos males consistiría en permitir que el sector privado se haga cargo, mediante concesiones, de la prestación de los servicios de salud.

La apuesta del gobierno de Flores se ha perfilado con una claridad pasmosa. La respuesta del gremio médico y de los sindicalistas ha estado a tono con el desafío gubernamental; a una intransigencia se ha respondido con otra de la misma magnitud. Obviamente, la responsabilidad no es equivalente para los actores del conflicto: el gobierno del presidente Flores carga con una mayor cuota de responsabilidad, no solo por haberse cerrado al diálogo con los médicos y sindicalistas, sino por abanderar planes de privatización de la seguridad social que, si no son manejados con tino y sentido de justicia, van a golpear fuerte a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. En otras palabras, el gobierno de Flores tiene una doble responsabilidad, en la agudización del conflicto, en el sistema de salud: se ha cerrado al diálogo y ha querido imponer, no sin un fuerte sesgo autoritario, un plan de privatización del sistema de salud, que no augura nada bueno para la mayor parte de salvadoreños.

Así las cosas, la resistencia de médicos y sindicalistas tiene un alto sentido de justicia que no debe pasarse por alto. Sin embargo, no siempre las causas más justas legitiman los medios que se usan para llevarlas adelante, sobre todo cuando estos últimos amenazan con provocar daños semejantes a los que se pretenden evitar. Dicho de otra

forma, si con la huelga los médicos y sindicalistas quieren defender el derecho de los salvadoreños a la salud, su prolongación indefinida no hace más que violentar de forma brutal ese derecho.

No se trata solo de unas molestias, generadas por un paro de labores de unos cuantos días —mismas que pueden ser digeridas por cualquier ciudadano que entienda que defender los derechos pisoteados tiene un costo que hay que asumir—, sino de unas molestias que están poniendo en riesgo el bienestar de cientos de personas, que demandan una atención médica urgente.

Médicos y sindicalistas parecen haber obviado el impacto social de un paro de labores, mantenido más allá de lo prudencial. Quizás han asumido que la amenaza de la privatización de los servicios de salud les va a generar un apoyo incondicional, por parte de la población, que no va a reparar en los contratiempos, provocados por la prolongación de la huelga. Esta es, a todas luces, una mala apuesta, porque ni la mayoría de salvadoreños ha dado señales claras de entender qué es lo que se juega en la huelga, en el sistema de salud, ni es probable que los usuarios de los servicios de salud estén dispuestos a simpatizar indefinidamente con una causa que los está afectando más allá de lo tolerable.

Solo una visión deformada de la realidad —alentada por una estrategia trasnochada de la “agudización de los conflictos de clase”— puede dar pie a una postura que no toma en cuenta el impacto social de la prolongación de la huelga, en el sistema nacional de salud. En este punto, pareciera ser que los intereses políticos del FMLN se han mezclado con una demanda social, de la cual el gremio médico y los sindicalistas del seguro social son portavoces. Desde los intereses del FMLN, lo mejor que puede pasar es que el conflicto en el sector salud se prolongue tan cerca como sea posible de las elecciones del próximo año; un gobierno debilitado es la mejor ayuda electoral con la que se puede contar. Desde los intereses sociales —y de cara al prestigio de médicos y sindicalistas—, lo más contraproducente es la prolongación de la huelga. Con raras excepciones, los protagonistas del movimiento huelguístico no han caído en la cuenta de esto. Las ambiciones del FMLN se les han colado por la puerta trasera y no se han dado cuenta de los riesgos que se corren cuando los ritmos de la política se imponen a los ritmos de lo social.

La apuesta del gobierno de Flores ha sido más que clara. Desde un punto de vista económico, el presidente Flores ha querido ser fiel a los intereses de los grandes empresarios, quienes exigen una privatización de la salud, sin reparar en los costos sociales que semejante medida traerá consigo. Políticamente, Flores dejó que el conflicto se agudizara, hasta llegar a niveles de exacerbación extremos, quizás a la espera de que la población no solo se cansara de las molestias provocadas por la huelga, sino que decidiera castigar al FMLN, causante último —en la óptica gubernamental— del movimiento laboral, encabezado por médicos y trabajadores del sistema nacional de salud. La “jugada” de Flores fue secundada con habilidad por una campaña publicitaria, lanzada por los medios de comunicación más poderosos, en la cual no se dejó de insistir en los daños sociales provocados por la huelga, así como la motivación política de esta última. Médicos y sindicalistas —dijo y repitió la prensa de derecha— estaban siendo utilizados por el partido de izquierda para sus propios fines; para salirse con la suya, el FMLN no escatimaba el sufrimiento y el dolor de todas esas personas —las fotografías así lo demostraban— que iban a diario las unidades de salud y se encontraban con que los médicos “irresponsables” no las querían atender.

El presidente Flores y los suyos confiaron en que esta estrategia publicitaria sería suficiente para doblegar a los huelguistas, una vez que los ciudadanos se manifestaran en su contra. El tiempo pasó y pocos se tragarón el anzuelo, lanzado por los asesores de Flores. Más aún, el fantasma de la privatización de la salud hizo que cundiera la alarma en sectores de la sociedad que, hasta el momento, solo se habían encogido de hombros ante la crisis del seguro social. Médicos de prestigio hicieron público su apoyo a sus colegas en paro; organizaciones sociales de base —de mujeres, sindicatos y universidades— se hicieron presente en las jornadas de protesta cívica, convocadas por aquéllos. Lentamente, se comenzó a incubar un movimiento social de resistencia contra la privatización del sistema nacional de salud. La estrategia publicitaria del gobierno había fallado; los médicos y los sindicalistas podían darse por satisfechos, pues lo estaban haciendo retroceder. Mayor satisfacción tuvo que haberse suscitado en las filas del FMLN; Flores y los suyos —el aparato publicitario del partido y las trampas de sus dipu-

tados— estaban empantanados en una crisis que se les iba de las manos y que ellos mismos habían contribuido a crear. Nada más había que esperar a que el gobierno siguiera con los desatinos y que el frente de los médicos y sindicalistas se mantuviera firme en su oposición a la privatización de la salud.

Si no quería hundirse, el presidente Flores tenía que hacer algo espectacular. Lo razonable era convocar a una mesa de discusión, a la cual se integrarían los actores del conflicto, de modo que se trabajara por una solución integral al problema de la salud pública, en El Salvador. Como sucede muchas veces en la política criolla, la razón no es la que tiene la primera palabra, sino la última: a Flores no se le ocurrió nada mejor —contra toda razón— que lanzar de manera inconsulta su propuesta para crear un nuevo sistema de salud.

La “solución” de Flores consistía, en lo fundamental, en impulsar un sistema de salud en el cual los usuarios del seguro social tendrían la opción, sin aumentar su cuota de cotización, de solicitar atención médica, ya fuera en la misma institución de seguridad social —tal como se hace en la actualidad— o ya fuera en clínicas particulares —aspecto novedoso de la propuesta del presidente Flores—. Pero los beneficios de la oferta presidencial no se quedaban ahí. El nuevo sistema abriría sus puertas a los hijos de los beneficiarios hasta los doce años de edad y los médicos, aunque estuvieran contratados por el seguro social y tuvieran su clínica particular —con su propia clientela—, podrían ganar dinero extra con la atención de pacientes adscritos al plan de salud integral. Todos, entonces, salían ganando con la solución de Flores: los usuarios quienes, sin pagar más, tendrían otras opciones de servicios de salud; los hijos de éstos, quienes se beneficiarían al ampliarse la edad para ser atendidos; y los médicos, quienes podrían triplicar sus ingresos, laborando en el seguro social, atendiendo a su clientela particular y recibiendo pacientes que, siendo asegurados, decidieran buscarlos en sus consultorios. Por si no fuera suficiente, Flores —que antes vetó una iniciativa de ley en la cual se dejaba establecido el compromiso del gobierno de no privatizar los servicios de salud— sostuvo en su propuesta que el seguro social no sería privatizado, al igual que los bienes propios del servicio de salud, como hospitales y clínicas, pues “pertenecen a todos los que como trabajadores cotizamos a la institución”.

Demasiado bueno para ser verdadero. En efecto, al revisar con detenimiento la oferta de Flores pronto salieron a la luz sus intenciones de fondo: debilitar al seguro social y justificar su cierre, en cuanto que los usuarios de los servicios de salud iban a preferir la atención privada, en lugar de las citas eternas, las largas colas y la carestía de medicamentos, propias de la institución. Claro está, no todos los salvadoreños podrían acceder a servicios privados de salud de calidad y a bajo costo, tal como lo ofreció el presidente en su mensaje, “Democratización del sistema de salud”, en el cual dio a conocer su propuesta. Aquí estaba la mayor debilidad de la oferta presidencial; solo unos pocos iban a poder asumir los costos de unos servicios privados de salud, que se irían por las nubes, una vez que el mercado impusiera sus sacrosantas reglas de la ganancia rápida. En definitiva, había demasiados puntos confusos y oscuros en la solución ofrecida por el presidente Flores. Pretendía ser una propuesta audaz, pero su intención inocultable era desarmar al gremio médico y no tanto resolver los problemas de la salud pública en el país. Mucho más razonable hubiera sido —como ya señalamos— que convocara a una mesa de diálogo, en la cual estuvieran representados los médicos, los usuarios, los empresarios y el mismo gobierno, en la cual se planteara, como un insumo más, la propuesta que él ofrecía como “su” solución. Una decisión de esa naturaleza hubiera puesto de manifiesto de forma clara la disposición del gobierno para resolver el conflicto en el seguro social y sentar las bases de una reforma a fondo del sistema nacional de salud.

A Flores le salió el tiro por la culata. Pretendía sorprender con una propuesta audaz, pero lo único que logró fue aumentar los temores sobre las consecuencias que traería consigo la privatización del sistema nacional de salud. El gremio médico y los sindicalistas cerraron filas; con la iniciativa de Flores, el conflicto —lejos de amainar— se vio agudizado. Flores no logró exorcizar el fantasma de la privatización, pese a que en el discurso en el que anunció el plan de salud integral sostuvo que el seguro social no sería privatizado. La oposición política en la Asamblea Legislativa no quedó satisfecha con el ofrecimiento verbal del presidente y, a los pocos días del anuncio, elaboró un decreto titulado, “De la garantía estatal de la salud y seguridad social”, en el cual quedaba establecido que el sistema nacional de salud no sería privatizado ni

dado en concesión. El presidente Flores quedó atrapado en medio de su propia retórica. Si era real su compromiso de no privatizar los servicios de salud, no debía oponer mayor resistencia al decreto que así lo dejaba establecido; si no era real este compromiso, no le quedaba más remedio que vetarlo, con el subsiguiente malestar social que esa decisión generaría. Flores optó por las frases dichas a medias, aunque sin asumir una postura clara. Sostuvo que vetaría el decreto legislativo, pero —transcurrido casi un mes desde que el mismo fue emitido por la Asamblea Legislativa— todavía no ha resuelto nada al respecto, ni tampoco ha dado señales de desistir de su propia propuesta de reforma. Entre tanto, el gremio médico y los sindicalistas hicieron de la defensa de ese decreto su principal bandera de lucha. Al unísono, hicieron ver que no suspenderían la huelga hasta que fuera sancionada la ley, observada o no por el presidente Flores, que garantizara que el sistema nacional de salud no sería privatizado.

Hasta la última semana de octubre, todo hacía prever que la intransigencia de uno y otro sector haría que el conflicto se prolongara por tiempo indefinido. Estaba claro que quienes salían más desgastados eran Flores y los suyos; después de todo, era del gobierno de donde habían salido los planteamientos más necios y menos democráticos, desde que se inició el conflicto en el seguro social. El presidente Flores, una vez que su propuesta de reforma no tuvo el eco social esperado, estaba atrapado y sin salida; los médicos y sindicalistas eran conscientes de ello y no dudaban de su capacidad para doblarle la mano al gobierno. El FMLN esperaba, sin impacientarse más de lo necesario, los dividendos políticos que le dejaría el fracaso gubernamental ante la resistencia de los médicos y sindicalistas en huelga. El bienestar y la salud de los salvadoreños se convirtieron en un instrumento para doblegar al adversario y para fortalecer la propia posición.

En este escenario, es poco el espacio que fue quedando para la discusión razonable de los problemas existentes, en el sistema nacional de salud. Menos espacio quedó para la discusión de posibles soluciones y así poner fin a la huelga. Sin embargo, en la medida en que las posiciones se endurecieron, se abrió paso la tesis de que era necesaria una mediación de altura —con personalidades honorables y de prestigio—, no solo para terminar con el paro de labores, sino para avanzar en una

propuesta de reforma del sistema de salud, que no se redujera a la mera privatización de los servicios médicos y hospitalarios. En los primeros días de noviembre, esta posibilidad cobró visos de realidad, cuando el presidente Flores promovió la integración de una comisión de reforma del sector salud, cuyo principal integrante sería el alcalde Héctor Silva, y a la cual la Iglesia católica se mostró dispuesta a apoyar con tres de sus miembros: Mons. Fernando Sáenz Lacalle, Mons. Gregorio Rosa Chávez y Mons. Elías Samuel Bolaños. El rol de Silva —como él mismo se encargó de aclarar una y otra vez—no era el de mediador, sino el de miembro de una comisión de reforma del sector salud, que no estuviera basada en la privatización. Obviamente, tal comisión no iba a desatenderse de la necesidad de desmontar la huelga cuanto antes, pues su éxito iba a depender del apoyo del gremio médico y de los sindicalistas en paro.

Los celos y el resquemor clamaron por sus fueros en las filas del FMLN. Silva fue visto por muchos de sus compañeros de militancia como un “traidor” y un “vendido” al gobierno; incluso los máximos dirigentes del partido anunciaron que Silva no solo no sería su candidato en las próximas elecciones municipales, sino que sería expulsado del partido. Los médicos más afines con el partido de izquierda hicieron coro con sus líderes más vociferantes; para ellos, Silva solo quería sacar beneficio personal de la crisis, sin importarle el problema de la salud de los salvadoreños. Otros, que quisieron parecer más perspicaces, sostuvieron que el alcalde estaba siendo utilizado por Flores para debilitar al movimiento social contra la privatización, es decir, que Silva estaba sirviendo, sin siquiera darse cuenta, a los “enemigos” de la causa popular.

Muchos simpatizantes del FMLN comparten esta visión de la situación. Sin embargo, dentro y fuera del partido hay personas no preocupadas por desgastar al gobierno y acceder al poder, sino porque los salvadoreños tengan una vida más decente y digna. Quienes están comprometidos con el bienestar de la población no comparten la tesis de que lo que cuenta es acabar al gobierno de ARENA, cueste lo que cueste, porque por encima de esa finalidad política hay cosas más importantes como —en el caso de la salud— garantizar que quienes necesitan atención médica la reciban pronta y eficazmente. Para lograr este *objetivo social* se tiene, primero, que poner fin a la huelga; y, segundo,



impulsar una reforma del sector salud que ponga remedio a los males del sistema vigente y que permita a todos los salvadoreños el acceso a los servicios de salud necesarios. Para alcanzar este doble propósito, es preciso arriesgarse. A lo mejor, el gobierno de Flores no pretende más que ganar tiempo y desactivar, entre tanto, el conflicto en el sistema de salud. Pero ese es un riesgo que tiene que correr, porque la otra salida que queda es la prolongación indefinida de la huelga y la agudización del conflicto, con los efectos sociales negativos, que todo el mundo conoce. Héctor Silva —todo parece indicar que por voluntad propia— decidió arriesgarse y lo que razonablemente se podía esperar era que su partido lo apoyara. Sin embargo, sucedió todo lo contrario. El FMLN le dio la espalda, poniendo de manifiesto una ceguera política indigna de un partido que dice luchar por la justicia y la igualdad. Tras seis días de trabajo intenso —y de presiones de sus compañeros de partido, así como de una persistente ambigüedad del presidente Flores—, Silva anunció su retiro de la comisión que apenas daba sus primeros pasos, dando un compás de espera a su participación hasta que el gremio médico y el presidente Flores, tras lograr acuerdos mediante un contacto directo, se lo soliciten de forma explícita.

De resolverse el conflicto en el sistema nacional de salud e iniciarse su reforma, que tuviera como propósito la inclusión social y no su privatización, es obvio que el presidente Flores —al haber fomentado una iniciativa que se orientara a ese fin— iba a salir bien parado. Mejor le iba a ir a Silva, por su contribución a una solución de esa naturaleza. Con todo, quienes más ganarían serían

los salvadoreños, cuyas condiciones de vida se verían sensiblemente mejoradas, si se creara un sistema de salud más eficiente e incluyente. De prolongarse de forma indefinida el conflicto y de no iniciarse una profunda reforma en el sistema de salud, es claro que el gobierno se continuará desgastando y el FMLN podrá sumar a su favor el fracaso gubernamental, pero los salvadoreños —sobre todo, los que dependen de la red nacional de salud— son, de nuevo, los grandes perdedores.

Para quienes se colocan ante la realidad nacional con una visión de país, la ganancia que pueda obtener el gobierno y el partido ARENA, si se resuelve la crisis del sistema de salud pública, es algo absolutamente irrelevante, comparado con el bien social alcanzado. Para quienes se colocan ante la realidad nacional con una visión sectaria de izquierda, lo que pueda ganar ARENA es lo único que cuenta, cualquier cosa que contribuya a ello debe ser alentada y cualquier iniciativa que sea vista como beneficiosa para el partido de derecha —aunque con esa iniciativa la ganancia mayor sea para el país, en su conjunto— debe ser bloqueada. Es una visión de este tipo la que parece estar orientando el comportamiento de la dirigencia del FMLN, en la actual coyuntura.

Solo así se explica la reacción visceral de los líderes más emblemáticos del FMLN a la iniciativa de Silva de cooperar con el gobierno para resolver el conflicto del sistema nacional de salud. No se les ocurrió dar un voto de confianza a su cuadro más calificado, a la espera de los resultados de su gestión. No se les ocurrió que era bueno —incluso para sus propios intereses políticos— poner a prueba la disposición de Flores para resolver de una buena vez la crisis del sector salud. No se les cruzó por la cabeza que, de fracasar la gestión de Silva, era el gobierno de Flores el que iba a quedar más debilitado y no el alcalde capitalino y su partido. Por último, no pudieron vislumbrar que, de ser un éxito la intervención de Silva, era él y el FMLN los que se iban a llevar los mayores créditos, por su capacidad para contribuir a resolver una crisis de carácter nacional. Los viejos dirigentes del FMLN no están para sutilezas. Se dejan guiar por el maniqueísmo ideológico, que tan buenos resultados les dio cuando se trataba de tirar balas a unos enemigos vestidos de verde olivo como ellos. Incapa-

ces de cambiar sus esquemas ideológicos, prefieren deshacerse de aquellos que optan por ponerse a la altura de los desafíos de la realidad social. Silva les rompió los esquemas y muy campantes amenazaron con expulsarlo, sin darse por enterados de la pérdida que ello supondría para un partido sin suficientes cuadros competitivos. El FMLN y la izquierda salvadoreña pierden, si se deshacen de figuras como Silva, no porque éstas sean personalidades únicas e irrepetibles, sino porque son de las pocas figuras honorables y cualificadas, que han estado dispuestas a renunciar a sus profesiones para contribuir, desde la política, a hacer de El Salvador un país más digno. En la relación Silva-FMLN fue este último el que salió ganando, pues no solo remozó su imagen, sino que cuenta con un candidato ganador. Se equivocan quienes crean lo contrario, así sean los cuadros “históricos” del FMLN, cuya imagen y prestigio —esto sí es verdad— son inseparables de la imagen y prestigio del partido.

Son poco claras las razones por las cuales Silva ha desistido de participar en la comisión promovida por Flores para hacer frente a la crisis del

sistema nacional de salud. Como quiera que sea, Silva ha quedado como alguien comprometido con los problemas del país y le ha limpiado la cara de la política criolla. El presidente Flores ha desaprovechado la valiosa oportunidad de apoyarse en una persona que le enseñara una nueva forma de gobernar. Los dirigentes del FMLN han quedado como lo que son: unos líderes con la mirada puesta en el pasado, lentos para la reacción oportuna y la audacia, poco creativos y maniqueos. Aunque pretendan no recordar lo que dijeron cuando se supo que Héctor Silva se integraba a la comisión promovida por Flores, su ceguera ha quedado registrada en la memoria de todos aquellos que esperan del FMLN —ingenuamente quizás— una postura más lúcida ante los graves problemas nacionales.

San Salvador, 6 de noviembre de 2002.

**Luis Armando González**  
**Director del Centro de Información,**  
**Documentación y Apoyo a la Investigación**  
**(CIDAI) de la UCA**

